

**EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE
RECURSOS CONTRACTUALES**

EXCMO. SR.:

..... del **COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE VALENCIA**, con domicilio a efectos de notificaciones en C/. Hernán Cortés núm. 6 de València, actuando en nombre y representación de la expresada Corporación, comparece y **DICE:**

Habiendo tenido conocimiento del anuncio de la licitación para la Prestación del servicio de oficina de rehabilitación del entorno residencial de rehabilitación programada (ERRP) de l'Énova, publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público del pasado 9 de julio de 2024, (Expediente 145/2024), y dentro del plazo legal que se concede en el artículo 50 de la Ley de Contratos del Sector Público, formulamos el presente **RECURSO ESPECIAL** en base a los siguientes

FUNDAMENTOS

PRIMERA-. FUNDAMENTOS NORMATIVOS Y ESTATUTARIOS DE LA LEGITIMACIÓN DE LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS.

La legitimación de los Colegios Profesionales para intervenir en defensa de los derechos e intereses legítimos, colectivos y los profesionales de sus colegiados está expresamente reconocida en nuestro ordenamiento jurídico y en particular en la normativa de colegios profesionales.

La propia Ley de Colegios Profesionales 13 de febrero de 1974 entre las funciones que enumera de los Colegios Profesionales en el artículo 5.g), atribuye a los mismos: "ostentar en su ámbito la representación y defensa de la profesión ante la Administración, Instituciones, Tribunales, entidades y particulares, con legitimación para ser parte, **en cuanto litigios afecten a los servicios profesionales y ejercitar el derecho de petición, conforme a la Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, del artículo 1 de esta Ley**". El artículo 9.1 a de la misma Ley atribuye estas funciones a los Consejos Superiores o Generales de los Colegios profesionales "en cuanto tengan ámbito o repercusión nacional".

Las diferentes leyes autonómicas de Colegios Profesionales contemplan la atribución a los mismos de estas funciones.

Ha de destacarse que esta atribución legal de poder intervenir “en cuanto a litigios afecten a los intereses profesionales” se configura en términos amplios, es decir siempre que haya una “afectación” a los mismos que tienen un fundamento esencial que se expresa en el mismo artículo 5.g de la Ley de Colegios Profesionales, en la circunstancia de que estas Corporaciones de Derecho Público ostentan en su ámbito propio de actuación “la representación y defensa de la profesión”. Por tanto, la legitimación de los Colegios Profesionales es una atribución legal esencial para el cumplimiento de sus fines propios y se proyecta en una doble dimensión: la defensa de los intereses de los profesionales; y de la profesión en su conjunto es decir del interés general o colectivo de la profesión ante los poderes públicos.

En el ámbito concreto de la regulación estatutaria de los Colegios de Arquitectos, cabe mencionar el artículo 6.2 de los Estatutos Generales de los Colegios de Arquitectos y su Consejo Superior, aprobados por RD 129/2018, de 16 de marzo, que atribuyen al Consejo Superior la función de “representar y defender unitariamente a la profesión” y el artículo 51.1.a), que dispone que entre sus funciones está la de “representar unitariamente la profesión de arquitecto, procurando los intereses profesionales”. Y en general, tienen entre sus funciones todas aquellas que “revistan interés común y general para la profesión” (artículo 51.5 de los referidos Estatutos Generales). Y en cuanto a los Colegios de Arquitectos el artículo 3.d, les atribuye entre sus fines “...defender los intereses generales de la profesión, en particular en su relación con los poderes públicos”. Y en la misma línea el artículo 7.2 a y b disponiendo este apartado entre las funciones de los Colegios de Arquitectos la de: “Actuar ante los Jueces y Tribunales, dentro y fuera de su ámbito territorial, tanto en nombre propio y en defensa de los intereses de la profesión y de los profesionales de sus miembros, como en nombre, por cuenta y en sustitución procesal de éstos, en la defensa que ellos mismos voluntariamente les encomienden”.

III.- Doctrina del Tribunal Constitucional sobre la legitimación de los Colegios profesionales.

El Tribunal Constitucional tiene elaborada una completa doctrina sobre la legitimación de los colegios profesionales como corporaciones de Derecho público y titulares del derecho a la tutela judicial efectiva en cuanto están facultados para intervenir y recurrir resoluciones y actos administrativos en defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos y los profesionales de sus colegiados.

Esta doctrina constitucional tiene destacada importancia para el objeto de este informe, especialmente en **dos sentencias del TC, las sentencias 38/2010 de 19 Jul. 2010, Rec. 10094/2006 y 67/2010 de 18 Oct. 2010, Rec. 8750/2006**. Ambas sentencias estimaron sendos recursos de amparo interpuestos por el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) contra sentencias que habían inadmitido por falta de legitimación los recursos interpuestos contra procedimientos en materia de contratación pública. En la primera de las sentencias citadas el motivo del recurso se centraba en que la convocatoria del concurso no se había publicado en los medios oficiales legalmente establecidos y en la segunda de las sentencias citadas la cuestión se refería a que la convocatoria era de proyecto y ejecución de obra por lo que se privaba a los colegiados de acceder a la fase de redacción del proyecto.

CTAV COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE VALÈNCIA

Los aspectos más destacados de esta doctrina constitucional se pueden sintetizar en las siguientes consideraciones, en la sentencia del 19 de julio de 2010 se dice:

"El examen de la queja planteada debe partir del presupuesto de que este Tribunal ya ha reconocido a los colegios profesionales, en tanto que corporaciones de Derecho público, la titularidad del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho de acceso al proceso (STC 45/2004, de 23 de marzo, FJ 3)..."

*"Dada la trascendencia que para la tutela judicial tienen las decisiones que deniegan el acceso a la jurisdicción, su control constitucional ha de realizarse de forma especialmente intensa, más allá de la verificación de que no se trata de resoluciones arbitrarias, manifiestamente irrazonables o fruto de un error patente. **Dicho control procede a través de los criterios que proporciona el principio pro actione, entendido no como la forzosa selección de la interpretación más favorable a la admisión, sino como la interdicción de aquellas decisiones de inadmisión que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón se revelen desfavorables para la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva o resulte desproporcionadas entre los fines que se pretenden preservar y los intereses que sacrifican** (SSTC 88/1997, de 5 de mayo, FJ 2; 45/2004, de 23 de marzo, FJ 4; 73/2004, de 22 de abril, FJ 3; 119/2008, de 13 de octubre, FJ 4; 184/2008, de 22 de diciembre, FJ 3; 28/2009, de 26 de enero, FJ 2; 183/2009, de 7 de septiembre, FJ 3)".*

La misma sentencia del TC precisa que se entiende por interés legítimo al decir que:

"...Se caracteriza como una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto o disposición impugnados), de tal forma que su anulación produzca automáticamente un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio), actual o futuro, pero cierto, debiendo entenderse tal relación referida a un interés en sentido propio, cualificado y específico, actual y real (no potencial o hipotético). Dicho de otro modo, se trata de la titularidad potencial de una ventaja o de una utilidad jurídica, no necesariamente de contenido patrimonial, por parte de quien ejercita la pretensión, que se materializaría de prosperar ésta..."

Y la sentencia del TC deja muy claro que el COAM estaba legitimado plenamente teniendo en cuenta:

"...la indiscutible competencia de los arquitectos para intervenir en la elaboración de los instrumentos de planeamiento urbanístico objeto de la convocatoria, es evidente, como el Ministerio Fiscal pone de manifiesto en su escrito de alegaciones, que la pretensión ejercitada por el colegio profesional en el recurso contencioso-administrativo, esto es, que se procediese a la publicación de la convocatoria del concurso en los medios oficiales legalmente establecidos, puede subsumirse tanto en el ámbito de la representación y defensa del interés general o colectivo de la profesión misma, como en el ámbito de la defensa de los intereses de los profesionales colegiados, pues mediante la publicidad pretendida se perseguía en defensa de los intereses de la profesión la libre concurrencia en términos de igualdad en un proceso de licitación de indudable competencia de los arquitectos, a la vez que, en defensa de los intereses de sus colegiados, se quería que éstos a través de los medios legalmente establecidos pudieran tener conocimiento de la convocatoria llevada a cabo y evitar que vieran cercenadas sus posibilidades de participación como consecuencia de una indebida publicidad del concurso, lo que para ellos suponía una indudable y concreta ventaja o utilidad, estrechamente conectada con el fin del colegio de defender los intereses profesionales de sus colegiados..."

CTAV COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE VALÈNCIA

Reitera la anterior doctrina, la segunda de las sentencias dictadas del TC de 18 de octubre de 2010 mencionando la Ley de Colegios Profesionales y el artículo 19 de la LJCA que atribuye la legitimación en el orden jurisdiccional contencioso -administrativo a las corporaciones de derecho público que "estén legalmente habilitadas para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos".

La sentencia del TC hace una precisión importante al distinguir entre las funciones propias de los Colegios Profesionales, las que se refieren a la defensa de la profesión y las de la defensa de los intereses profesionales de los colegiados. Así se dice:

"De la anterior normativa se desprende que, entre las funciones propias de los colegios profesionales, se encuentra la representación y defensa de la profesión, función diferenciada de la defensa de los intereses profesionales de los colegiados. Y, como afirmamos en la STC 45/2004, FJ 5, mientras que para la defensa de los intereses de los profesionales colegiados pueden concurrir tanto los colegios profesionales como los propios colegiados cuando resulten individualmente afectados, así como otras personas jurídicas, tales como sindicatos y asociaciones profesionales, por el contrario, cuando se trata de la representación y defensa de la profesión misma, esto es, del interés general o colectivo de la profesión, esa función representativa y de defensa ante los poderes públicos se ejerce por los colegios profesionales, bajo la nota de exclusividad o monopolio".

En cuanto al recurso, la sentencia entendió que no procedía negar la legitimación al COAM, ya que por parte del mismo:

"..se reivindica ininterrumpidamente la defensa de los principios de igualdad y libre concurrencia a los concursos públicos, es evidente que se trata de la defensa de principios que interesan no sólo a sus colegiados, sino a la totalidad de la profesión de arquitecto, sin que la repercusión de dicha defensa en la generalidad del colectivo profesional pueda identificarse, como pretende la Universidad convocante, con una legitimación abstracta y falta de vínculo con el objeto del recurso Contencioso-Administrativo.

Por tanto, se puede llegar a la conclusión de que el COAM ejerció su acción ante la jurisdicción ordinaria frente a la propia concepción de la convocatoria en su modalidad, excepcional, de contratación conjunta del art. 125 LCAP, basándose en el menoscabo que, en las posibilidades de concurrir, sufrirían a su juicio todos aquellos profesionales que, capaces de llevar a cabo la redacción del proyecto, no reunieran sin embargo los requisitos exigidos para poder ejecutar el mismo, por ser ajenos a las empresas constructoras con capacidad para ejecutar unas obras de tal magnitud".

IV.- La legitimación en el ámbito de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (LCSP) y en concreto para la interposición del recurso especial.

La LCSP regula el recurso especial en materia de contratación pública en los artículos 44 a 60. El recurso se configura como un recurso de carácter especial y potestativo en unos supuestos concretos que enumera el artículo 44 de la Ley y cuya resolución corresponde en el ámbito del sector público estatal al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC).

CTAV COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE VALÈNCIA

A los efectos que aquí nos atañen, el artículo 48 de la LCSP contiene una disposición específica sobre la legitimación activa para interponer el recurso especial, y que en gran medida sirve de referencia normativa para la interposición de recursos en el ámbito de la contratación pública. En el caso de no incluir a las empresas de nueva creación, se afecta directamente a los derechos de todos aquellos colegiados que ve perjudicado sus derechos al acceso a este concurso, cuando la ley en su artículo 90.4 considera que pueden acceder sin la acreditación de la solvencia técnica prevista en el artículo 90.1 de la LCSP.

El párrafo primero del artículo 48 de la LCSP dispone:

"Podrá interponer el recurso especial en materia de contratación cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso".

Del tenor literal del precepto se desprende, como se ha destacado por la doctrina y la jurisprudencia, que se produce una ampliación considerable de la legitimación para recurrir y en particular para las personas jurídicas, entre las que se encuentran las corporaciones profesionales. Esta ampliación de la legitimación está en consonancia con el ámbito de aplicación del recurso especial que ahora abarca en su objeto a más actuaciones y entre ellas específicamente los anuncios de licitación y los pliegos.

Así, conforme al artículo 46 de la LCSP, las personas jurídicas pueden interponer dicho recurso cuando no solo los derechos e intereses legítimos individuales resulten afectados, sino también los **"colectivos"** que en nuestro caso tiene un especial transcendencia por cuanto conforme a la doctrina constitucional antes expuesta, los Colegios Profesionales pueden interponer recursos cuando resulten afectados los intereses individuales de los colegiados y cuando actúen en defensa del interés colectivo de la profesión. Por ello el artículo 48 de la LCSP ha recogido la doctrina constitucional mencionada.

Y el segundo elemento que contiene dicho precepto legal y que supone una ampliación de la legitimación para recurrir atañe el núcleo esencial de lo que se entiende por interés legítimo. Así concurrirá legitimación cuando esos intereses legítimos individuales o colectivos **"se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso"**. Es decir, una persona jurídica estará legitimada no solo cuando haya un perjuicio directo a dichos intereses legítimos sino también cuando haya una afectación que puede ser directa o indirecta por las decisiones objeto del recurso.

Por tanto, en el concepto de legitimación para la interposición de recursos en materia de contratación pública, la evolución jurisprudencial y normativa ha consistido en mantener una interpretación amplia, con especial incidencia para las personas jurídicas en la defensa de los derechos e intereses legítimos tanto individuales como colectivos, lo que se proyecta en la actuación de los Colegios Profesionales que legal y estatutariamente están facultados para intervenir en los procedimientos que afecten a los profesionales y a la profesión.

CTAV COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE VALÈNCIA

En la contratación pública, ello se traduce en la legitimación de los Colegios Profesionales para recurrir los pliegos de aquellas licitaciones que, en las condiciones de acceso, de participación, de garantías del procedimiento y criterios de adjudicación, entre otros aspectos resulten lesivos para dichos intereses legítimos individuales y colectivos. **Siempre que exista una afectación, aunque sea indirecta para tales derechos e intereses, habrá que entender que existe interés legítimo y por tanto legitimación.**

V.- Finalmente, y en apoyo de todo lo manifestado hasta este momento, y por si existiesen dudas sobre la legitimación activa que tienen todos los colegios profesionales para interponer recursos contra los pliegos de los contratos públicos, la reciente sentencia del **Tribunal Supremo, sala de lo contencioso administrativo sección 3ª número 317 de 2024, de 27 de febrero**, zanja definitivamente esta cuestión, en su fundamentación jurídica:

“TERCERO. - La cuestión sobre la que esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo debe pronunciarse con el objeto de la formación de jurisprudencia, tal como se expone en el auto de la Sección Primera de esta Sala de 3 de febrero de 2022, consiste en determinar: si los Colegios Profesionales tienen legitimación para impugnar los pliegos de contratos administrativos, cuando las actuaciones a contratar corresponden a su sector profesional.

Delimitada, en estos estrictos términos, la controversia casacional, esta Sala considera que el Tribunal de instancia ha realizado una interpretación inadecuada del artículo 19.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, al confirmar la falta de legitimación activa del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos para impugnar la licitación pública referida a los Pliegos de Condiciones Administrativas y de Prescripciones Técnicas convocada por la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía para la redacción del Proyecto básico y ejecución de nuevo edificio administrativo para oficina comarcal agraria de Las Marismas en el municipio de Lebrija (Sevilla), en cuanto mantenemos que, por su rigorismo y formalismo excesivo, vulnera el derecho de acceso a un Tribunal que garantiza el artículo 24 de la Constitución y el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, pues no tiene en cuenta que la Corporación recurrente ostentaba un interés legítimo para recurrir dicha actuación administrativa, al afectar directamente a los intereses de la profesión, cuya defensa jurídica tiene encomendada, de conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo 5 de la Ley de Colegios Profesionales.

En efecto, partiendo de la doctrina del Tribunal Constitucional, expuesta en las sentencias 45/2004 de 23 de marzo de 2004 y 67/2010 de 18 de octubre de 2010, así como de la doctrina jurisprudencial de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, formulada en las sentencias de 13 de noviembre de 2007 (RC 8719/2004) y 30 de junio de 2015 (RCA 352/2014), cabe sostener que, en el supuesto que enjuicamos, constatamos que existe una conexión o vínculo unívoco entre las funciones que tiene atribuida la Corporación recurrente, en virtud de lo dispuesto en los artículos 1.3 y 5 g) de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, y del artículo 18 de la Ley del Parlamento de Andalucía, 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y la fundamentación jurídica de las pretensiones deducidas en el proceso, que conciernen al interés concreto y específico de preservar la calidad técnica de la intervención de los arquitectos en la redacción de proyectos de construcción de edificios, que afecta, por tanto, a los intereses colectivos de la profesión, por lo

CTAV COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE VALÈNCIA

que no apreciamos que el Consejo recurrente entable la acción jurisdiccional con base a una abstracta y genérica defensa de la legalidad, que, a juicio del Tribunal de instancia, supondrá el reconocimiento de la acción popular en materia de contratación administrativa.

Se elude en esta interpretación del Tribunal de instancia que, entre las funciones que corresponden a los Colegios Profesionales, según lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, les compete el ejercicio de cuantas acciones redunden en beneficio de la protección de los intereses de colectivo de sus colegiados (entre lo que cabe engazar, en este caso, el derecho de los profesionales integrados en el ámbito corporativo del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos a una buena y transparente administración de las licitaciones públicas que interesan a los profesionales de este sector), y que se proyecta en el reconocimiento del derecho corporativo «a ser parte en cuantos litigios afecten a los intereses profesionales», según reza el apartado g) del citado precepto, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 1.3 del referido texto legal, que enuncia los fines esenciales de las Corporaciones Profesionales en defensa de los intereses profesionales de los colegiados y la protección de los intereses de los usuarios de los servicios que prestan sus colegiados, lo que determina que, en este supuesto, en que están en juego la calidad técnica de los servicios profesionales prestados por los Arquitectos, resulte desproporcionado el pronunciamiento de confirmar el fallo de inadmisión del recurso contencioso-administrativo.

CUARTO. - Sobre la fijación de doctrina jurisprudencial en relación con la interpretación del artículo 5 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, en relación con lo dispuesto en el artículo 19.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Conforme a los razonamientos jurídicos expuestos, esta Sala, dando respuesta a las cuestiones planteadas en este recurso de casación, que presentan interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia declara que:

El artículo 5 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, en relación con lo dispuesto en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y en el artículo 19.1 de la Ley 29/998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, debe interpretarse, a la luz del derecho de acceso a un Tribunal, que constituye una de las garantías nucleares del Estado de Derecho, y que se garantiza en el artículo 24.1 de la Constitución Española y en el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el sentido de que los Colegios Profesionales gozan de legitimación ad procesum para entablar acciones ante la jurisdicción contencioso-administrativa con el objeto de pretender la anulación de resoluciones de convocatoria de licitaciones sometidas a la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, referidas a la prestación de servicios profesionales, en los supuestos que la actuación administrativa afecte a los intereses profesionales de los colegiados, y cuando la acción procesal repercuta directamente o redunde en beneficio del interés colectivo del propio sector profesional, al entablarse con la finalidad de la protección de intereses colectivos o generales, vinculados a la protección de la ética, la transparencia y responsabilidad en el desempeño de la profesión, así como cuando traten de evitar un perjuicio o un menoscabo cierto y efectivo al recto ejercicio de la profesión.

En consecuencia con lo razonado, procede declarar haber lugar al recurso casación interpuesto por la representación procesal del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos contra la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de 24 de septiembre de 2020, recaída en el recurso de apelación 262/2020, que casamos.”

Por lo tanto, recurrir una cuestión de competencia exclusiva de los arquitectos como es la de la redacción de los proyectos de viviendas, así como que se incluya a las empresas de nueva creación, en los criterios de solvencia técnica de acuerdo con el artículo 90.4 de la Ley de Contratos del sector público, es una cuestión de relevancia general e interés para el colectivo de la arquitectura.

SEGUNDO. - COMPETENCIA DE LOS TÉCNICOS REDACTORES.

El concurso contempla la titulación de ingenieros, para la redacción de un proyecto de rehabilitación de viviendas., en concreto ***los proyectos técnicos de rehabilitación edificios y el proyecto de obra de urbanización.***

Como bien sabe la administración a la que nos dirigimos, los únicos competentes para llevar a cabo estos trabajos son los arquitectos, pues de acuerdo con la ley de ordenación de la edificación, en su artículo 2.1 a), la competencia exclusiva en edificios residenciales es para hoy estos últimos técnicos.

Dado que el objeto del concurso es la reacción de un proyecto, le es de aplicación en su totalidad la ley de ordenación de la edificación, El artículo 2.2 punto b como a que refiere directamente a los trabajos que requieren de proyecto.

Siendo el objeto de la redacción de un proyecto, habrá que irse al contenido del artículo 10.2.a), que establece que será el arquitecto quien tendrá la competencia para la redacción del citado trabajo.

Tan solo podría redactar los proyectos de urbanización junto con los arquitectos, como únicos técnicos competentes.

No pudiendo dejar tampoco de lado la cuestión más relevante que sería la seguridad y salud de los moradores de la vivienda, siendo la estructura uno de los elementos más importantes, no se puede tratar con la ligereza con que lo hace el Colegio de Ingenieros técnicos, una competencia universal, cuando para todo eso ya se ha hecho el juicio de relevancia en la LOE, y analizados los planes de estudios de cada profesión, establecer la competencia exclusiva de los arquitectos en edificaciones de uso residencial.

Jurisprudencialmente, las Sentencias a continuación citadas, destacamos las siguientes, que se refieren a lo que hoy el Colegio de Ingenieros considera un proyecto parcial, pues las resoluciones que citamos hacen referencia a refuerzos de estructura, que sería lo que ha hecho el ingeniero técnico y la competencia no se admite por este colegio, ni por la ley ni por la jurisprudencia:

CTAV COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE VALÈNCIA

- SENTENCIA DEL TSJCV de 17 de noviembre de 2000 estimando el recurso del COACV contra acuerdo del Ayto. de Guadassuar por la aprobación de un proyecto básico y de ejecución de acondicionamiento de un edificio público (antiguo matadero municipal) destinado a docencia para adultos, redactado por un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

"FUNDAMENTO DE DERECHO

TERCERO. ... *Respecto de las atribuciones de los Arquitectos el art. 5º del R. Decreto de 22 de julio de 1864 disponía que 'los Arquitectos pueden proyectar y dirigir toda clase de edificios, así públicos como particulares, ejecutar mediciones, tasaciones y reparaciones, así interiores como exteriores de ellos, y ejercer cuantos actos les convenga relativos a la profesión sin limitación alguna, "habiéndose ya reconocido con anterioridad en el art. 2 de la Real Orden de 25 de noviembre de 1846 la competencia exclusiva de los Arquitectos para proyectar y dirigir las obras de nueva planta de toda clase de edificios, tanto públicos como particulares, así como para la medida, tasación y reparación así interior como exterior de las mismas obras'.*

A partir de las normas citadas cabe configurar la distinción conceptual entre las atribuciones de los Arquitectos y de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, incluyendo en el ámbito competencial de los Ingenieros de Caminos las obras relacionadas en su Reglamento Orgánico, y atribuyendo a los Arquitectos la competencia para proyectar y dirigir edificios o construcciones destinadas a vivienda humana, habiendo concluido el TS en la Sentencia de 11 de noviembre de 1981 antes citada que la 'competencia delimitatoria en cuanto a la actividad funcional de Arquitectos e Ingenieros de Caminos no puede desconocerse ni derogarse por las disposiciones vigentes en materia docente respecto del programa establecido en las respectivas escuelas de formación de unos y otros, ya que ello no atribuye competencias, sino que marca los cauces formativos profesionales que se estiman más idóneos para la mejor formación profesional de las dos carreras, cuyos márgenes de actuación están delimitados por sus disposiciones orgánicas y no por su normativa universitaria que apunta a otra teleología'.

Siendo pues que la delimitación competencial queda configurada no en función de la aptitud técnica derivada de la posesión de ciertos conocimientos, sino en función de las distintas normas atributivas de competencias, y que según ha reiterado la jurisprudencia los Arquitectos son los Técnicos con competencia universal para el proyecto de toda clase de edificios, con atribución exclusiva en los destinados a servir de vivienda humana, sea la misma permanente u ocasional, o a albergar concentraciones de personas, procede acoger la pretensión de la parte actora y estimar el recurso."

TERCERO. - CRITERIOS DE SOLVENCIA TÉCNICA: EXPERIENCIA. SIN REFERENCIA A EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN.

Nos encontramos ante un contrato no Sara, por un valor de 107.000 € cuyo umbral viene definido en el artículo 22.1, "b) 221.000 euros, cuando los contratos hayan de adjudicarse por entidades del sector público distintas a la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social"

CTAV COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE VALÈNCIA

El pliego de condiciones administrativas particulares solamente señala criterios de experiencia como solvencia técnica del artículo 90 de la LCSP, para poder acceder a la participación en este concurso, cuando nos encontramos ante un contrato NO SARA, y de acuerdo con el artículo 90.4 de la Ley de Contratos del sector Público, para las empresas de nueva creación, los criterios de admisión y participación en los contratos de servicios serán otros que no se han incluido en las bases de este. Con lo que se quedarían fuera sin posibilidad de participar en este.

A juicio de este Colegio, el presente concurso, no tiene en cuenta a las empresas de nueva creación para que puedan poder participar en el mismo, lo que supone un trato desigual del resto, que sí tienen experiencia, y en contra de lo previsto en el artículo 90.4 de la Ley de Contratos del sector público, así como restrictiva a la libre competencia y el principio de igualdad y acceso, al no permitir que estos profesionales y empresas de nueva creación, (tratándose de un contrato no SARA).

El art. **90.4 de la LCSP dice:** *"En los contratos no sujetos a regulación armonizada, cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiéndose por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) a i) anteriores, sin que en ningún caso sea aplicable lo establecido en la letra a), relativo a la ejecución de un número determinado de servicios"*

No incluir esta cláusula, que por otro lado es obligatorio en este tipo de contrato, supone una vulneración del principio de concurrencia, vinculado al de igualdad y no discriminación (artículo 1º de la LCSP) puesto que, a través de estos, se garantiza que participen de los procedimientos de licitación el mayor número posible de licitadores en igualdad de condiciones, y sin dejar fuera a los que no tienen aún esa experiencia.

Y el artículo 1 de la LCSP establece:

"Objeto y finalidad.

*1. La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y **no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores**; y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa."*

PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.

Mediante el principio de igualdad de trato y no discriminación se exige que las situaciones comparables no reciban un trato diferente y que no se trate de manera idéntica situaciones diferentes. Se pretende favorecer el desarrollo de una competencia sana y efectiva entre las

empresas que participan en una contratación pública. **Es exigible que todos los licitadores dispongan de las mismas oportunidades** al formular los términos de sus ofertas y que éstas estén sometidas a las mismas condiciones para todos los competidores.

En este sentido la [sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2000](#) (Sala de lo Contencioso-Administrativo) que entre los principios esenciales que rigen la contratación administrativa, está la igualdad de acceso entre las distintas empresas dedicadas a la contratación pública y el procedimiento de contratación que tiende a garantizar el interés público mediante la articulación de tres principios cardinales de la licitación: el principio de publicidad, el principio de libre competencia y el principio de igualdad de oportunidades. Por consiguiente, el principio de igualdad y la prohibición de toda discriminación son principios fundamentales que deben respetarse en todo caso y a lo largo de todo el proceso de contratación.

La LCSP 2017 dedica el primero de sus preceptos a los principios generales de la contratación pública y así establece en su apartado 1 que la norma tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores

El Título I de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE se intitula "Ámbito de aplicación, definiciones y principios generales" y dedica su artículo 2 GIMENO FELIU, "Las nuevas Directivas –cuarta generación en materia de contratación pública. Hacia una estrategia eficiente en compra pública ", REDA núm. 159 (2013), págs. 25 y ss. Gabilex Nº Extraordinario marzo 2019 <http://gabilex.castillalamancha.es> 23 18 a los "Principios de la contratación" para establecer *que "los poderes adjudicadores tratarán a los operadores económicos en pie de igualdad y sin discriminaciones, y actuarán de manera transparente y proporcionada. La contratación no será concebida con el objetivo de excluirla del ámbito de aplicación de la presente Directiva ni de restringir artificialmente la competencia"*.

Principios reconocidos por el [Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea](#) y, en particular la libre circulación de mercancías, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios y de los principios derivados de la misma, tales como el de la igualdad de trato, no discriminación, el reconocimiento mutuo, la proporcionalidad y la transparencia" y se hace alusión reiterada a los mismos a lo largo de toda la exposición de motivos de la Directiva 2014/24 (considerandos 12, 31, 40, 58, 68, 101, 114 y 136) 5. Así lo exigen distintos preceptos de los tratados de derecho originario, tal y como han sido interpretados por el propio Tribunal (STJUE de 13 de octubre de 2005, asunto C 458/03, Parking Brixen GMBH)⁷. El TJUE ha reiterado que el principio de igualdad de trato de los licitadores, que constituye la base de las directivas relativas a los procedimientos de adjudicación de contratos públicos, y el objetivo de favorecer el desarrollo de una competencia sana y efectiva entre las empresas que participan en una licitación pública, exige que todos los licitadores dispongan de las mismas oportunidades en la formulación de los términos de sus ofertas e implica pues que éstas se sometan a las mismas condiciones para todos.

CTAV COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE VALÈNCIA

Y recientemente en **la resolución número 1416/2021 del Tribunal administrativo central de recursos contractuales de 22 de diciembre de 2021, interpuesto por el colegio oficial de arquitectos de la Comunidad Valenciana**, en el que el fallo textualmente dice:

*Primero. Estimar parcialmente el recurso interpuesto por D. Luis Miguel Sendra Mengual, en representación del COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (COACV), contra los pliegos de la licitación convocada por la Gerencia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana para contratar los "Trabajos de consultoría y asistencia técnica consistentes en la redacción del proyecto constructivo y dirección de obra de adecuación de las rejillas de ventilación en Metrovalencia para la disminución de ruido", expediente 21/044, **que se anulan por no incorporar los criterios de solvencia alternativos exigidos por el artículo 90.4 de la LCSP, con retroacción de actuaciones al momento anterior a la aprobación del PCAP**"*

O más recientemente en el **Recurso nº 299/2022 C Valenciana 83/2022 Resolución nº 415/2022 Sección 2ª RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES En Madrid a 31 de marzo de 2022**, dictado en el mismo sentido.

En virtud de lo expuesto,

SOLICITO a VI, tenga por presentado **Recurso especial** en tiempo y forma, y acuerde corregir el pliego de condiciones en el sentido solicitado, de que se incluyan a las empresas de nueva creación, la competencia exclusiva de los arquitectos para la redacción de los proyectos, suspendiendo el plazo para la adjudicación del concurso.

En València, a 30 de julio de 2024

